

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
DISTRITO JUDICIAL DE VALLEDUPAR
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUUNICIPAL
AGUSTÍN CODAZZI – CESAR
J01prmpalcodazzi@cendoj.ramajudicial.gov.co
Calle 18 No. 13-07 Barrio Machiques. Tel: 035-5766077

Agustín Codazzi – Cesar, Abril Veintiocho (28) de Dos Mil Veintiuno (2.021).

REF: Acción de Tutela promovida por ALEJANDRO CABALLERO PRIETO en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR. Vinculado: EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI-CESAR.

Radicación No: **200134089001-2021-00086-00**

ASUNTO A TRATAR

Aborda el Despacho la labor de adoptar la decisión de fondo que en derecho corresponda, dentro de la Acción de Tutela promovida por el señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, habiéndose vinculado a la misma al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, en defensa de su Derecho Fundamental de Petición, consagrado en el Artículo 23 de la Constitución Política, para lo cual se tienen en cuenta los siguientes.....

ANTECEDENTES

Correspondió a este despacho, por reparto, la presente acción de tutela promovida por el señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, en contra de la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, habiéndose vinculado a la misma al MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, en defensa de su Derecho Fundamental a la Petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política y en virtud de ello solicita se le ordene a la accionada, lo siguiente: a)._ Que se declare que en efecto la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, en su condición de accionada, no respondió el derecho de petición elevado por el accionante, Sr. ALEJANDRO CABALLERO PRIETO b)._ Que como consecuencia de lo anterior, se ampare constitucionalmente el Derecho Fundamental violado. c)._ Que resuelva de fondo el Derecho de Petición invocado, por tanto se impugne la comisión de la sanción que le fuera impuesta, por la infracción C29 a la norma de tránsito bajo la resolución No. 08826365-2018 de fecha 11/02/2017 del comparendo No. 20013000000008826365 de fecha 14/04/2015. . d). _ Que se declare la nulidad de la Resolución No. 08826365-2018 que dio origen al cobro sancionatorio. e). _ Que la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, en consecuencia, del anterior numeral actualice las bases de datos correspondientes de SIMIT, RUNT, así como todas aquellas donde aparezca el Sr. ALEJANDRO CABLELRO PRIETO como deudor de dicha sanción.

Los hechos en los que la accionante finca su solicitud, los podemos enunciar así:

- Que el día 13 de Enero de 2021, presentó virtualmente a los correos electrónicos transito@agustincodazzicesar.gov.co y notificacionjudicial@agustincodazzi-cesar.gov.co de la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, derecho de Petición, en el cual solicitó: "Impugnar la comisión de la sanción que le fuera impuesta, por la infracción C29 a la norma de tránsito con Resolución No. 08826365-2018 de fecha 11/02/2017, acusando que dicha infracción que se le sanciona al Sr. ALEJANDRO CABALLERO PRIETO y al vehículo automotor de placas CJB600 a través de fotomulta es imposible toda vez que ni la persona indicada, ni el vehículo han estado en momento alguno en el municipio de Agustín Codazzi – Cesar, derecho de Petición que válgase anotar, nunca fue contestado.
- Que en vista del mutismo dado frente a la petición elevada formalmente, y señalada en el numeral anterior, envié oficio por el mismo medio, es decir a los correos electrónicos indicados anteriormente de la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, el adiado 23 de febrero de 2021 donde se reiteró la solicitud elevada

mediante Derecho de Petición, escrito que tampoco tuvo respuesta alguna por parte de la entidad.

- Que es por ello, que se ha visto en la obligación de acudir a este amparo constitucional, para que se absuelva formalmente la petición elevada desde el otrora 13 de enero de 2021 a la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, ya que requiere prueba de la supuesta Fotomulta y como esta es seguro que no existe por nunca haber estado el suscrito y el vehículo objeto de la infracción, entonces simple y llanamente se declare la nulidad de la resolución que dio origen a este cobro.

Fueron acompañados como pruebas por parte del accionante, las siguientes: a). - Copia de oficio presentado a la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, el día 13 de enero de 2021. b). _ Soporte de correo electrónico enviado el 13/01/2021 del oficio referente al numeral 1. c).- Copia de oficio presentado a la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, el día 23 de febrero de 2021. d). Soporte de correo electrónico enviado el 23/02/2021 del oficio referente al numeral 3. e). _ Copia del comparendo No. 20013000000008826365 f). _ Copia de la consulta/Estado de cuenta SIMIT, de las Resolución No. 08826365-2018. h). _ Copia tarjeta de propiedad del vehículo de placas CJB 600.

Por venir en legal forma, la solicitud fue admitida mediante auto de fecha 15 de Abril del año que cursa, requiriéndose a la Entidad Accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, y al vinculado MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, para que en el término de dos (2) días contados a partir de la fecha de la notificación del auto admisorio, se sirvieran rendir un informe sobre los hechos planteados por el peticionario, habiéndose pronunciado únicamente la primera, través de la Doctora KATTERYN PARADA CASTRELLÓN, en su aducida calidad de titular d la misma, mientras que el vinculado guardó absoluto silencio.

CONTESTACIÓN DE LA ACCIONADA LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR. _

La doctora **KATTERYN E. PARADA CASTRELLÓN**, en su aludida calidad de Secretaria de Tránsito y Transporte de esta municipalidad, mediante escrito radicado en este despacho manifiesta que ese organismo de tránsito, en aras de salvaguardar el derecho fundamental de Petición, tutelado dentro de la acción incoada, procedió a emitir Oficio de fecha 20 de abril de 2021 por medio del cual se dio respuesta a la petición elevada por la señora ALEJANDRO CABALLERO PIETRO el día 23 de Febrero de 2021. Dicho oficio fue enviado a través de correo electrónico sectransitocodazzi@gmail.com al correo electrónico indicado por el peticionario cabalejo@hotmail.com.

Agrega la representante de la accionada, que frente a la protección del derecho fundamental de petición, existe carencia actual de objeto por hecho superado y, en consecuencia, solicita que se profiera un fallo desestimatorio de las peticiones de la accionante por cuanto actualmente no existe una violación a los derechos argumentados.

Lo anterior teniendo en cuenta que en Sentencia T-146 de 2012, con ponencia del Magistrado JORGE IGNACIO PRETELT CHALJUB, la Corte Constitucional ha considerado que cuando hay carencia de objeto, la protección a través de la tutela pierde sentido y, en consecuencia, el juez de tutela queda imposibilitado para emitir orden alguna de protección del derecho fundamental invocado; mientras que en la Sentencia T-988/02, la Corte manifestó que“(…) si la situación de hecho que origina la violación o la amenaza ya ha sido superada en el sentido de que la pretensión erigida en defensa del derecho conculcado está siendo satisfecha, la acción de tutela pierde eficacia y por lo tanto razón de ser.”

Que de lo anterior anexa a la presente los siguientes documentos:

1. Copia del oficio de fecha 20 de abril de 2021, a través del cual se dio respuesta a la petición elevada por el accionante.
2. Pantallazo de envío de correo electrónico contentivo del oficio referido en el numeral anterior.

Una vez enunciados los antecedentes del caso y habiendo sido relacionado el acervo probatorio acopiado, procederemos a adoptar la decisión de fondo que en estricto derecho corresponda, previas las siguientes...

CONSIDERACIONES

1. _ Competencia

Para el Juzgado es claro que la competencia para conocer de la presente Acción de Tutela, recae en este despacho al tenor del artículo 37 del Decreto – ley 2591 de 1991 y del Decreto 1382 de 2000.

2. _ Legitimidad de las Partes

El señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, por ser la persona afectada con las presuntas acciones y omisiones de las entidades demandadas, se encuentra legitimado para incoar la presente acción de amparo. Así mismo, la SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR, por ser la primera la entidad a la cual el accionante le atribuye los actos que presuntamente vulneran su derecho fundamental cuyo amparo es deprecado y la segunda por haber sido vinculada a esta actuación, reúnen los presupuestos de legitimidad para comparecer en calidad de accionadas, dentro de este trámite tutelar.

3. _ Problemas jurídicos y esquema de resolución

De acuerdo con la situación fáctica planteada corresponde a este despacho determinar los siguientes aspectos: *i).*_ La procedencia de la acción; y, *ii).*_ De ser procedente la acción, establecer si la entidad accionada SECRETARÍA DE TRANSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI- CESAR, y/o la vinculada MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI, CESAR, por presuntamente no haberle brindado una respuesta a la solicitud presentada en virtud del derecho de petición elevada por el señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, vulnera el derecho fundamental cuyo amparo es deprecado, y de ser así, adoptar las medidas de protección pertinentes.

Para resolver los problemas jurídicos planteados, este despacho procederá de la siguiente manera: **1).**_ Se determinará la procedencia de la acción. **2).**_ Se referirá al derecho fundamental cuya protección se impetra. **3).**_ Se traerá como referencia la Ley 1755 de 2015, respecto al término para emitir respuesta a las peticiones. **4).**_ Se abordará el caso en concreto.

3.1._ Procedencia

Respecto a la procedencia de la acción de tutela es dable aclarar que ésta al ser elevada a precepto constitucional por el Constituyente de 1991, ha sido concebida como un medio de defensa, ágil, eficaz, preferente, residual y sumario de los derechos fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y en algunos casos por los particulares cuando estos se encuentren en alguna de las siguientes condiciones: a)._ Cuando cumplan funciones públicas o que estén encargadas de la prestación de un servicio público. b)._ Cuando sus acciones u omisiones afecten grave y directamente el interés colectivo; y c)._ Cuando el solicitante se halle en estado de subordinación o indefensión respecto al particular.

En razón de lo anterior Nuestra Carta Política en su artículo 86 dispone:

"Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública".

Se le quiso dar a esta herramienta constitucional un efecto inmediato y subsidiario al limitar su procedencia a la inexistencia de otro medio de defensa judicial de igual eficacia para la protección del derecho, o que, habiéndolo, esta se utilice como mecanismo de carácter transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Quiere lo anterior significar que la acción de tutela es un mecanismo judicial de protección de los derechos fundamentales que procede *i)* cuando el afectado no dispone de otro

instrumento para su restablecimiento, *ii*) en caso de que el previsto no resulte eficaz, en consideración a la situación particular que afronta el actor y *iii*) siempre que la intervención transitoria del juez de amparo resulte necesaria, para evitar o al menos mitigar un perjuicio irremediable.

En el caso bajo estudio el Despacho no observa la existencia de otro medio eficaz de defensa que le permita al accionante obtener la protección del derecho presuntamente vulnerado, por lo tanto es factible pregonar de la acción incoada, su procedencia.

3.2._ Derecho Fundamental cuya protección se invoca

3.2.1._ Derecho de Petición._ En este orden de ideas cabe señalar que el Derecho de Petición es de aquellos que por su naturaleza de Constitucionales y Fundamentales admiten su protección a través de la vía expedita y sumaria de la Acción de Tutela. Consagra el artículo 23 Superior:

"Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución."

Ahora bien, para que no se torne inocuo el derecho fundamental de petición, se requiere no solo que el peticionario tenga la facultad de presentar la solicitud, sino, que esta sea resuelta en forma rápida, oportuna y de fondo. No basta entonces que el encargado de resolver la petición, se limite a generar una respuesta somera o superficial sobre el asunto objeto del derecho que se impetra. Se hace necesario también que se le dé una resolución a la situación planteada dentro de la solicitud y que el interesado reciba de manera real y efectiva la solución brindada, siendo indispensable que esa resolución se ponga en conocimiento de los interesados a través de un medio que asegure su eficacia.

Sobre el particular nos ilustra la sentencia T-181 de 1993 con ponencia del Magistrado Hernando Herrera Vergara, en los siguientes términos:

"(...) Puede afirmarse que el derecho fundamental sería inocuo si solo se formulara en términos de poder presentar la respectiva petición. Lo que hace efectivo el derecho es que la petición elevada sea resuelta rápidamente. De nada serviría el Derecho de Petición, si la misma Constitución no consagrara el correlativo deber de las autoridades de proferir pronta resolución (...)"

Más adelante, en Sentencia a T-558 de 2012, dijo:

"(...) El derecho de petición, como institución jurídica, encuentra su razón de ser en la necesidad de regular las relaciones entre las autoridades y los particulares, con el fin de que estos últimos puedan conocer y estar al tanto de las actuaciones de cualquier ente estatal. Desde este punto de vista, su núcleo esencial está en la pronta respuesta que se le brinde a las solicitudes presentadas.

Por su parte, la jurisprudencia constitucional ha señalado la relevancia que cobra el derecho fundamental de petición, ya que se constituye en un instrumento clave para el funcionamiento de la democracia participativa, y para el acceso a derechos como el de información y libertad de expresión, entre otros.

En ese orden de ideas, la Corte ha manifestado, a su vez, que el derecho de petición no solo implica la posibilidad de presentar solicitudes a las autoridades estatales o a entes particulares, cuando la ley lo permita, sino, de igual manera, que se de una oportuna respuesta con sujeción a los requerimientos establecidos en la ley para dicha petición. Es decir, independientemente de que lo resuelto por la entidad sea adverso o no a los intereses del peticionario, la resolución del asunto debe contar con un estudio minucioso de lo pretendido, argumentos claros, que sea coherente, dé solución a lo que se plantea de manera precisa, suficiente, efectiva y sin evasivas de ninguna clase. Sobre el particular ha sostenido la Corporación que:

"... una respuesta es suficiente cuando resuelve materialmente la petición y satisface los requerimientos del solicitante, sin perjuicio de que la respuesta sea negativa a las pretensiones del peticionario; es efectiva si la respuesta soluciona el caso que se plantea (artículos 2, 86 y 209 de la C.P.); y es congruente si existe coherencia entre lo respondido y lo pedido, de tal manera que la solución a lo pedido verse sobre lo preguntado y no sobre un tema semejante o relativo al

asunto principal de la petición, sin que se excluya la posibilidad de suministrar información adicional que se encuentre relacionada con la petición propuesta”

“(…) Así, para tener claridad sobre los elementos del derecho de petición, esta Corporación ha indicado que el mismo se compone de:

- 1. La posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas.*
- 2. La obtención de una respuesta que tenga las siguientes características:*
 - (i) Que sea oportuna;*
 - (ii) Que resuelva de fondo, en forma clara y precisa lo solicitado; lo cual supone que la autoridad competente se pronuncie sobre la materia propia de la solicitud de manera completa, sin evasivas respecto a todos y cada uno de los asuntos planteados.*
 - (iii) Que la respuesta sea puesta en conocimiento del peticionario.*
- 3. La respuesta es independiente del hecho de si es favorable o no, pues no necesariamente dar una respuesta de fondo implica acceder a lo pedido.*

“(…) Bajo ese entendido, para que la respuesta a la petición se encuentre ajustada a la ley y a lo que la jurisprudencia constitucional ha manifestado al respecto, la misma, además de ser oportuna y de fondo como ya se mencionó, debe ser comunicada al peticionario. (Subrayas y negrillas ajenas al texto original).

De igual manera, por tratarse de un derecho con categoría fundamental, es susceptible de ser protegido a través de la acción de tutela. No obstante, para que el amparo proceda, no basta con afirmar que se elevó una petición, sino que debe haber prueba, siquiera sumaria, de la misma, es decir, que se cuente con algún tipo de herramienta que permita respaldar la afirmación, y por su parte, es la autoridad la que debe demostrar que dio respuesta oportuna, clara y de fondo a la solicitud (…)”.

En ocasión ulterior, en Sentencia T-801/12, dispuso:

“(…) En relación con su contenido y alcance, la Corte ha explicado que: i) es determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia; ii) su contenido esencial comprende: a) la posibilidad cierta y efectiva de elevar, en términos respetuosos, solicitudes ante las autoridades, sin que éstas se nieguen a recibirlas o se abstengan de tramitarlas; b) la respuesta oportuna dentro de los términos establecidos en el ordenamiento jurídico; c) la respuesta de fondo o contestación material, lo que supone que la autoridad entre en el fondo de la materia propia de la solicitud, sobre la base de su competencia, refiriéndose de manera completa a todos los asuntos planteados (plena correspondencia entre la petición y la respuesta), excluyendo fórmulas evasivas o elusivas; y d) la pronta comunicación de lo decidido al peticionario, con independencia de que su sentido sea positivo o negativo (…)”.

3.3._ Ley 1577 de 2015 (Reglamentación al Derecho de Petición).

Procedente es analizar lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1577 de 2015 respecto de los términos para responder los derechos de petición, el cual menciona:

“Artículo 14. Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones. Salvo norma legal especial y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes.

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Parágrafo. Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en la ley expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto.”

3.4._ El caso concreto.

En el evento que nos ocupa, del caudal probatorio compendiado especialmente de lo manifestado en la solicitud por parte del accionante puede inferirse sin hesitación alguna, que la situación planteada consiste en que el señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, reclama ante esta casa judicial ordene a la entidad accionada SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI, lo siguiente: a)._ Que se declare que en efecto la Secretaria de Tránsito Municipal de Agustín Codazzi, en su condición de accionada, no respondió el derecho de petición elevado por este. b)._ Que como consecuencia de lo anterior, se ampare su Derecho Fundamental de petición. c)._ Que resuelva de fondo el Derecho de Petición invocado por este, por lo tanto se impugna la sanción que le fuera impuesta, por la infracción C29, bajo la resolución No. 08826365-2018 de fecha 11/02/2017 del Comparendo No. 2001300000008826365 de fecha 14/04/2015, toda vez que ni este ni el vehículo objeto de Fotomulta, han estado en el municipio de Agustín Codazzi – Cesar. d). _ Que de declare la nulidad de la Resolución No. 08826365-2018 que dió origen al cobro sancionatorio. e). _ Que actualice las bases de datos correspondientes de SIMIT, RUNT, así como todas aquellas donde este aparezca como deudor de dicha sanción.

Ahora bien, estudiadas las solitudes elevadas ante la entidad accionada, por parte del accionante, en fechas 23 de Enero y el 23 de Febrero del cursante año, encuentra el despacho que estas comprenden las siguientes peticiones: 1._ Que impugna la sanción impuesta por la omisión de la infracción C-29 contenida en la Resolución No. 08826365-208, de fecha 11/02/207, (sic ¿). Comparendo No. 2000130000000882635 del 14/04/2015. 2._: Se declare la Nulidad de la referida resolución. 3._ Consecuentemente se actualicen las bases de datos del SIMIUT y RUNT, así como todas aquellas donde aparezca como deudor por esa sanción.

Estudiados entonces los hechos de la solicitud de tutela, los interrogantes plantados en la solicitud que en ejercicio del derecho de petición fue elevada por el actor ante la entidad accionada y lo manifestado por la señora Representante de la demandada SECRETARIA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE de esta ciudad, puede concluirse que si bien es cierto que obra en esta actuación constitucional evidencia de que la accionada le brindó una respuesta al accionante, no obstante esta no comprende la totalidad de los interrogantes plantados, pues no hace referencia a la procedencia o no de la impugnación de la providencia que impone la sanción, como tampoco hace alusión sobre la procedencia o no, de la declaratoria de nulidad de la misma y la procedencia o no de la actualización en las bases de datos del SIMIT y RUNT, de la información correspondiente al accionante, por lo que, muy a pesar de encontrarse precluido el término conferido por la ley, para tal fin, en este caso el término otorgado por la Ley 1755 de 2015, para resolver esta clase de solicitudes, sin encontrarse fundamento que justifique tal omisión o demora por parte de la entidad accionada, evidenciándose entonces que, en efecto, la demandada, con su desidia, viene conculcando el derecho fundamental de petición cuya protección se invoca, imponiéndose entonces el otorgamiento del amparo deprecado, para lo cual se le ordenará a la señora representante legal de la entidad demandada SECRETARÍA DE TFRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR, o a quien haga sus veces, que un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho, proceda a resolver de fondo, en forma clara y concreta, la solicitud que en ejercicio del derecho de petición, fue presentada por el accionante señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO, a la que se contrae esta acción constitucional, como también a ponerla en su conocimiento en forma idónea y oportuna. De la misma manera se le prevendrá para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas omisivas que dieron lugar a la presente acción de tutela.

REF: Acción de tutela promovida por el señor ALEJANDRO CABALLERO PRIETO en contra de LA SECRETARÍA DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR Y EL MUNICIPIO DE AGUSTÍN CODAZZI - CESAR. RAD. 200134089001-2021-00086-00.

En mérito de lo antes expuesto el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Agustín Codazzi– Cesar, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

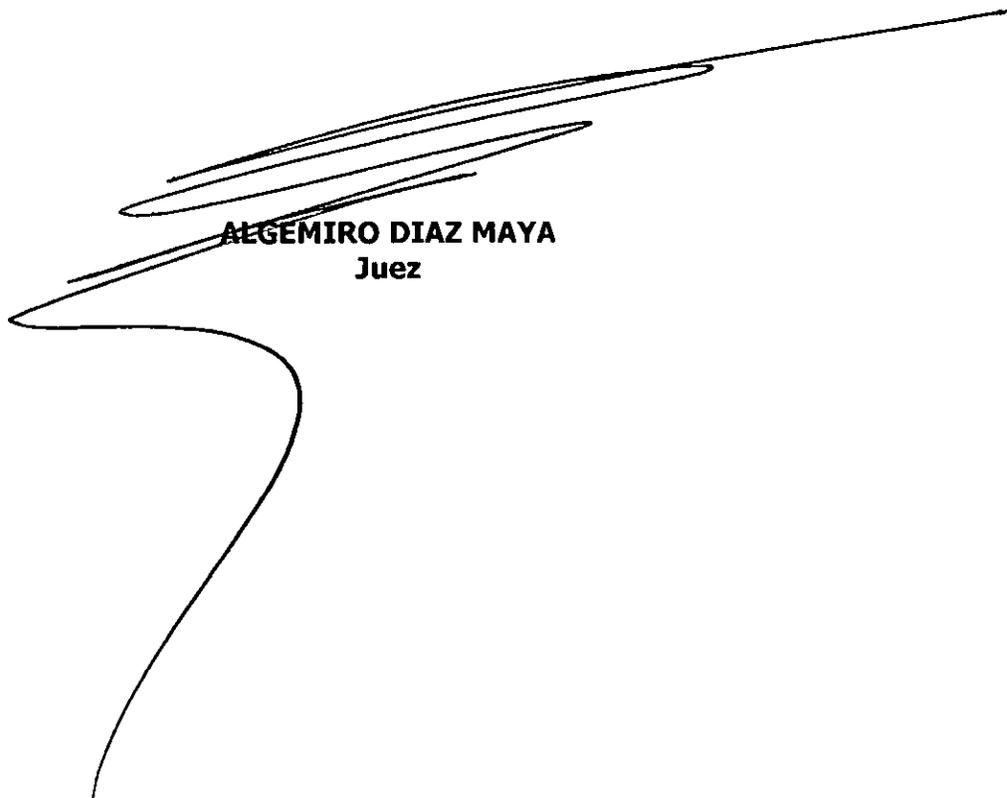
Primero._ Conceder el Amparo Tutelar a los derechos de Petición y Debido Proceso, solicitado por el señor **ALEJANDRO CABALLERO PRIETO**, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído._ En consecuencia se ordena al Representante Legal de la entidad accionada **SECRETARÍA DE TFRÁNSITO Y TRANSPORTE MUNICIPAL DE AGUSTÍN CODAZZI – CESAR**, o a quien haga sus veces, que un término no superior a cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir de la notificación de este fallo, si aún no lo hubiere hecho, proceda a resolver de fondo, en forma clara y concreta, la solicitud que en ejercicio del derecho de petición, fue presentada por el accionante señor **ALEJANDRO CABALLERO PRIETO**, a la que se contrae esta acción constitucional, como también a ponerla en su conocimiento en forma idónea y oportuna.

Segundo._ Prevéngase a la señora representante legal de la accionada para que en lo sucesivo se abstenga de incurrir en las conductas omisivas que dieron lugar a la presente acción de tutela.

Tercero._ Notifíquese este fallo a las partes intervinientes, por el medio más expedito (art. 16 del decreto 2591 de 1991).

Cuarto._ Contra esta decisión procede el recurso de impugnación. Si no fuere impugnado este fallo dentro de los tres (3) días siguientes al de su notificación, envíese a la Honorable Corte Constitucional para su eventual revisión por el medio más eficaz notifíquese a los interesados.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ALGEMIRO DIAZ MAYA
Juez